

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 14º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-26578-2017
CARATULADO : QUEZADA/fisco de chile

En Santiago, a cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira y don Francisco Javier Ugás Tapia, abogados, en representación de don **FRANCISCO REGINALDO QUEZADA NÚÑEZ**, trabajador dependiente, todos domiciliados en Pasaje Doctor Sotero del Río N° 326, oficina 1.104, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quienes en virtud de lo dispuesto en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, deducen demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que exponen.

Señalan que su representado nació el 4 de octubre de 1957. Es hermano de don José Elías Quezada Núñez, siendo la madre de ambos doña Herminia Núñez Arratia y el padre de ambos don Elías Quezada Jara.

Refieren que el hermano del actor antes señalado, fue ejecutado el 9 de octubre de 1973, por acción imputable a agentes del Estado de Chile, siendo reconocido como víctima de violación a sus derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El hecho criminal cometido en perjuicio de don José Elías Quezada Núñez, fue indagado y esclarecido, y sus partícipes acusados, en el contexto de la causa rol N° 224-2010 “Episodio Casa de la Cultura de Barrancas”, del 34º Juzgado de Letras del Crimen de Santiago, sustanciada por el Ministro en Visita Extraordinaria don Mario Carroza Espinosa. El referido proceso criminal se encuentra en estado de plenario, y la acusación que dictó el Ministro instructor indicado, pronunciada el 27 de julio de 2016, en su considerando Segundo, en lo que especialmente atañe a la víctima antes individualizada, establece los siguientes hechos criminales: “SEGUNDO: Que estas probanzas en el estado actual del proceso son suficientes para tener por justificado:



I.- Que, a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena el control total de la ciudad de Santiago y distribuye misiones a realizar por las distintas unidades militares en lugares geográficos de la ciudad;

II.- Que, así las cosas, el Batallón del Regimiento Yungay que viaja el día 11 de septiembre desde la ciudad de San Felipe, queda definitivamente asentado en el Parque Quinta Normal, a cargo del Mayor Donato López Almarza y los subalternos Capitán Jorge Armando Turres Mery y Jorge Alberto Reyes Morel, y también por el cabo 1º Carlos Rodolfo Silva Pérez, quienes tenían instrucciones de reforzarse y coordinarse con la Primera Compañía de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Agrupación Escuela de Suboficiales”, que se encontraba a cargo del Capitán Gerardo Ernesto Urrich González y sus subalternos el Teniente Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y el Dragoneante Sergio Ignacio Amade Gómez, con el propósito de controlar el sector poniente de la capital;

III.- Que, con el fin de dar cumplimiento al cometido que se les había impuesto, la Escuela de Suboficiales se instala en dependencias de la otrora llamada “Casa de la Cultura” de la Comuna de Barrancas, actualmente comuna de Pudahuel, a contar del 21 de septiembre de 1973 en adelante, y lleva adelante diversos operativos militares:

(...)

f.- Detención del día 08 de octubre de 1973, de José Elías Quezada Núñez, miembro de la JAP en la Población Manuel Larraín y militante del Partido Socialista, es detenido desde la Población Manuel Larraín y también trasladado hasta la Casa de la Cultura; mismo día en que Rosalindo del Carmen Retamal, es detenido desde la Población San Pablo, comuna de Barrancas.

(...)

Después de finalizadas cada una de las detenciones de letras d), e) y f), los familiares se dirigieron hasta la Casa de la Cultura para averiguar el destino de sus parientes, siendo informados que serían dejados en libertad al día siguiente y/o trasladados hasta el estadio Nacional, lo que nunca aconteció.

IV.- Que, no obstante las respuestas que se le dieron a los familiares de las víctimas, todos ellos fueron encontrados sin vida en distintos puntos de la vía pública de la Comuna de Pudahuel, siendo las fechas de defunción las siguientes: (...); mientras que Alberto Toribio Soto Valdés, Rosalindo del Carmen Retamal y José Elías Quezada Núñez, registran como fecha común de defunción el 09 de octubre de 1973, (...).

V.- Que, la causa de muerte de las víctimas de la presente investigación, sin excepción alguna, son las heridas de bala recibidas en distintas partes de sus cuerpos”(sic).

Señalan que en el considerando Tercero de la acusación invocada, el tribunal de primer grado calificó jurídicamente los hechos como constitutivos del delito de homicidio calificado en grado de consumado, conforme lo dispuesto en el artículo 391 N° 2 del Código



Penal, perpetrado en perjuicio de don José Elías Quezada Núñez, el 09 de octubre de 1973, ocurrido en Santiago, entre otras personas. En la sección resolutive de la acusación citada, el tribunal elevó la causa al estado de plenario y acusó a Gerardo Ernesto Godoy Urrich González, Donato Alejandro López Almarza, Jorge Armando Turres Mery, Jorge Alberto Reyes Morel, Carlos Rodolfo Silva Pérez, Sergio Ignacio Ama de Gómez y Juan Ramón Fernández Berardi, como autores del delito consumado de homicidio calificado, en grado de consumado, en la persona de don José Elías Quezada Núñez, entre otras víctimas.

Relatan que según consta en el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (también conocido como “Informe Rettig”), la referida comisión de verdad reconoció a don José Elías Quezada Núñez como víctima de violaciones a sus derechos humanos. El indicado Informe señala: “Entre los días 3 y 8 de octubre –de 1973– fueron detenidas cinco personas en las comunas de Pudahuel y Quinta Normal, siendo todas trasladadas a la Casa de la Cultura de Pudahuel (Barrancas). Estas detenciones se habrían producido como consecuencia de los allanamientos efectuados en distintas poblaciones de las comunas mencionadas por militares acantonados en dicho recinto. Los cinco detenidos fueron encontrados muertos en la vía pública según sus certificados de defunción, entre los días 4 y 9 de octubre de 1973, y en todos los casos la causa de muerte es “múltiples heridas de bala, tóraco abdominales y cérvico craneanas”. Los afectados fueron:

(...)

José Elías Quezada Núñez, 28 años, pioneta, militante socialista, miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de su población. Fue detenido por militares, el día 8 de octubre de 1973 en la Población Manuel Larraín y trasladado a la Casa de la Cultura de Pudahuel. Su muerte se produjo –según certificado de defunción– el día 9 de octubre, en la vía pública a las 07:30 horas. El mismo día 9, al consultar sus familiares en la Casa de la Cultura, se les responde al igual que en el caso anterior, que fue trasladado al Estadio Nacional, en circunstancias que ya había sido ejecutado” (sic). (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I. Tomo 1. Reedición de 2007. Santiago de Chile, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007, pp. 185 y 186).

Aseveran que los efectos de dicho crimen perpetrado en la persona de don José Elías Quezada Núñez, perduran hasta el día de hoy y afectan al demandante, quien aún sufre por el daño que le ocasionaron agentes del Estado de Chile, producto de la muerte de su hermano. Estos espantosos hechos marcaron de manera determinante la vida de don Francisco Reginaldo Quezada Núñez. Este crimen en la persona de su hermano aún le provoca sentidos daños morales, al haber, agentes del Estado de Chile, ejecutado de manera criminal a aquél.



En razón de los sucesos antes relatados, es que interponen la presente acción de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, a objeto de que indemnice a don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, y se repare, en parte siquiera, el daño que se le ha causado.

En cuanto al Derecho, afirman que los hechos relatados constituyen crímenes de lesa humanidad. Agregan que los hechos comprobados en la investigación judicial de carácter criminal, perpetrados en la persona de don José Elías Quezada Núñez, además de constituir un delito conforme nuestra legislación interna, a la luz del derecho internacional, configuran un crimen de lesa humanidad. Los antecedentes de hecho previamente consignados configuran crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, estatuto que se ve confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas de 13 de febrero y de 11 de diciembre, ambas de 1946, concepto que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y que fue aprobada en 1998. Este crimen se produce en un contexto de ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil, desarrollado por agentes del Estado y con conocimiento de dicho ataque. Crímenes ignominiosos e intolerables para la humanidad, como los que se relatan en la demanda, han hecho surgir un Corpus Iuris en el ámbito del derecho internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos.

Refieren que sobre el tópico en cuestión, nuestra Judicatura se ha expresado, señalando la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago que “(...) resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores [...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito “contra la humanidad o de lesa humanidad”, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional” (Cfr. Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 16 de noviembre de 2006, caratulado “Ruz y otro con Fisco de Chile”, rol ingreso N° 4.464-01, considerando N° 2).

Expresan que el artículo 38, inciso 2°, de la Constitución Política de la República de 1980, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos, por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. En efecto, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha sentenciado que “(...) la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones



que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 26 de enero de 2005, caratulado “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, rol ingreso N° 3.354-03, considerando N° 11).

El fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supra constitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público. Para ilustrar mejor este mismo punto es pertinente tener presente algo de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia, para lo que pueden revisarse entre otros, casos como “Caro con Fisco”, “Bustos con Fisco” y “Albornoz con Ortiz y Fisco.”

Así, en el caso caratulado “Caro con Fisco”, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha señalado “(...) que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se ha consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de octubre de 2005, caratulado “Caro Silva con Fisco de Chile”, rol ingreso N° 4004-2003, considerando N° 6).

Por otra parte, en el caso caratulado “Albornoz con Ortiz y Fisco”, se refuerza la misma idea indicada en el párrafo previo, esto es, “(...) que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración, es de derecho público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 13 de diciembre de 2005, caratulado “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile”, rol ingreso N° 4006-2003, considerando N°19).

Estiman que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la demanda, resulta insoslayable remitirnos al Capítulo I



de la Constitución Política de la República de 1980, sobre las Bases de la Institucionalidad. Allí, el constituyente desarrolla los principios basales, desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Fundamental, en su inciso 4º, consagra que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. En concordancia con lo anterior, el artículo 5º, en su inciso 2º, reafirma que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización, centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano (Cfr. Cea, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, p. 210).

Citan lo señalado por el Tribunal Constitucional de Chile al respecto: “(...) el ordenamiento institucional estructurado por la Constitución de 1980 descansa sobre ciertos principios y valores básicos, entre los cuales cabe señalar [...] la libertad del hombre, que los derechos fundamentales de la persona humana son anteriores y superiores al Estado y la Constitución, razón por la cual no los crea sino que los “reconoce y asegura”; que el Estado en cumplimiento de su finalidad propia, cual es promover el bien común, debe darles segura y eficaz protección [...] que el ejercicio de la soberanía que se realiza por el pueblo y por las autoridades que la Constitución establece reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; [...] que todos estos principios se encarnan en disposiciones concretas de la Carta Fundamental como son, entre otros, los artículos 1º, 4º, 5º, inciso segundo, y 19, en especial su número 3, inciso séptimo; y que estos preceptos no son meramente declarativos sino que constituyen disposiciones expresas que obligan a gobernantes y gobernados tanto en sí mismas, como también, en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones de la Constitución” (Cfr. Tribunal Constitucional de Chile, sentencia de 21 de diciembre de 1987, caratulado “Requerimiento en contra del Señor Clodomiro Almeyda”, rol N° 46, considerandos N° 19, N° 20 y N° 21).

Estiman que de este modo, las disposiciones reseñadas, en conjunto con los artículos 6º y 7º, ambos de la Constitución Política de la República de 1980, los que, a su vez, establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal, como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.



En cuanto la responsabilidad del Estado a la luz del derecho internacional, expresan que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona humana frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del *Corpus Iuris* internacional conformado por fuentes jurídicas convencionales y consuetudinarias emanadas del derecho internacional de los derechos humanos, que obligan al Estado de Chile. Y es que no podía ser de otra manera, puesto que el Estado de Chile, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien, mediante la vigencia de determinadas normas que se fundan en la costumbre internacional y los Principios Generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas, según lo preceptuado por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones internacionales, que tienen como marco la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136, todos de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos que integran la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo lo anterior, ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993, p. 25). Se trata, en consecuencia, de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que, con su actuar, infringe los límites que le señalan los derechos humanos, como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.



Confirma normativamente esta interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República de 1980, que establece los derechos y deberes constitucionales, al señalar, de modo categórico, que “La Constitución asegura a todas las personas [...]”.

Concluyen que así, el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia, a través de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2º, que incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Sostienen la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señalando que por los motivos antes expuestos, y como ha quedado de manifiesto, la resolución jurídica del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política de la República de 1980, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Por el contrario, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños, contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error la aplicación de normas de derecho privado, a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos que constituyen crímenes de derecho internacional, como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, ya que ambos estatutos difieren en su naturaleza y fines, y están destinados a otras conductas e intereses. Al respecto, cobran relevancia los artículos 27 y 28, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.

Esgrimen que la diferencia entre uno y otro estatuto de responsabilidad sería evidente, para lo cual citan lo siguiente: “(...) es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana” (Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 2004, p. 23).

En el mismo sentido, les parece prudente reproducir aquí el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes se han pronunciado de



forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender, por la vía de la analogía, ciertos conceptos propios del derecho civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. En efecto, estos jueces han dicho que “(...) los conceptos jurídicos, por cuanto encierran valores, son producto de su tiempo, y como tales no son inmutables. Las categorías jurídicas cristalizadas en el tiempo y que pasaron a ser utilizadas –en un contexto distinto del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos- para regir la determinación de las reparaciones se vieron fuertemente marcadas por tales analogías de derecho privado: es el caso, v. gr., de los conceptos de daño material y daño moral, y de los elementos de *damnum emergens* y *lucrum cessans*. Dichos conceptos han estado fuertemente determinados por un contenido e interés patrimoniales, marginando lo más importante en la persona humana como es su condición de ser espiritual. Tanto es así que hasta el mismo daño moral es comúnmente equiparado, en la concepción clásica, al llamado “daño no patrimonial”. El punto de referencia sigue, aun, siendo el patrimonio. La transposición pura y simple de tales conceptos al plano internacional no podría dejar de generar incertidumbres. Los criterios de determinación de las reparaciones, de contenido esencialmente patrimonial, basados en analogías con los del Derecho Civil, jamás nos ha convencido, y no nos parecen enteramente adecuados o suficientes cuando se los transpone al dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de especificidad propia” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C N° 42. Voto razonado conjunto de los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli, párrafos 7 y 8).

Agregan que en este sentido ha fallado la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ha señalado que “(...) tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX” (Cfr. Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado “Carrasco con Fisco de Chile”, sentencia de 10 de julio de 2007, rol ingreso N° 6715-2002).

A continuación exponen un conjunto de razones de texto que llevarían a fundamentar la razón de que el Derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los Derechos Fundamentales de la persona humana, a saber:

1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con



una práctica sistemática y masiva por parte del Estado –cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello- destinada a exterminar a un número importante de la población nacional, sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil, uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste, el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y, 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello, fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo 2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). Demás está decir que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, más aún, es contraria al Derecho Internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes.

Exponen a continuación sobre la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señalando que la materia de que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino que además, la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de las libertades y derechos de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona –derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por los N° 1 y N° 7, ambos del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental-, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada. Por su parte, la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional suscrito y ratificado por Chile, actualmente vigente en su territorio, aplicable en la especie en razón de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República de 1980, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los



derechos fundamentales de la persona humana, que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Afirman que si bien, por un lado, es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes Principios Generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al derecho administrativo y en especial al derecho internacional de los derechos humanos. Así, se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas. [Tales] principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos” (Cfr. Excm. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 14 de octubre de 2009, caratulado “López con Fisco de Chile”, rol ingreso N° 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, considerando N° 18).

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de Justicia de La Haya, desde los albores del Siglo XX– ha establecido que “(...) es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia a considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7, párrs. 25-26). Por lo anterior, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano, al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte), trae aparejada la obligación de reparar el mal o daño que ha causado tal violación. En esta materia, la norma rectora es el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica (Cfr. Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 18 de enero de 2006, “Marfull González con Pinochet Ugarte”, rol ingreso N° 37.483-2004, considerando N°18).

Estiman que en Chile, dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano, la lógica que debiera operar en casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos de alguna persona, tendría que ser la misma, esto es,



reparar íntegramente el mal causado. Obligación del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber, el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros (Cfr. Nikken, P. El concepto de derechos humanos, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 1994, pp. 15-17).

Señalan que cabe tener presente que sobre el citado artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que “(...) ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. (...) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Esta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al derecho internacional” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116, párrs. 52-53). Así también, cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 13 de diciembre de 2006, “Caso Molco”, rol ingreso N° 559-2004, considerando N° 19).

Vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144, publicado el 1° de agosto de 2009, que en su artículo 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.

Relatan que en este mismo orden de ideas, nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados



internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 2005, que establece los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales, al establecer que “[...] La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.

Afirman que a la luz de todo lo dicho, se puede concluir que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble, constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible, en virtud del Principio IV de dicha resolución, según el cual “[...] Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional”.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee —en el Principio 23, sobre restricciones a la prescripción— que “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”.

En resumen, el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de



violaciones a sus derechos fundamentales, mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del Derecho Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, logrando sujetar, dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente, desde los primeros acuerdos interestatales. Así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad, y de los crímenes de Derecho Internacional en general, declarando que “[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción – por el transcurso del tiempo – de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de enero de 2009, “Episodio Tormen”, rol ingreso N° 3907-2007, considerando N° 30).

Concluyen afirmando que en la jurisprudencia de nuestra Judicatura, la concreción de los principios informadores del derecho internacional de los derechos humanos, de congruencia y progresividad así como la interpretación e integración de sus normas, según el ya citado principio pro homine.

A continuación, mencionan algunos de los fallos en que nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil, cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional, lo cual denota un criterio jurisprudencial constante y consistente en la materia de nuestro supremo tribunal, a saber:

- 1.- “García Guzmán Luis y Otros” Caso Liquiñe, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4662-2007, de 25 de septiembre de 2008, pronunciado por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (disidente), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y los abogados integrantes Sr. Juan Carlos Cárcamo y Sr. Domingo Hernández (prevención);
- 2.- “Sanhueza Luis y Otros”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 6308-2007, de 8 de septiembre de 2008, pronunciado por los Ministros Sr. Juan Araya, Sr. Nibaldo Segura (disidente), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y el abogado integrante Sr. Hernán Álvarez;
- 3.- “Arellano Stark y Otros”, Caso Caravana de la Muerte, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4723-2007, de 15 de octubre de 2008, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Juan Carlos Cárcamo;



- 4.- “Ofelia de la Cruz Lazo”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 6212-2007, de 29 de octubre de 2008, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría) Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;
- 5.- “Contreras Sepúlveda Juan Manuel y Otros, Episodio Tormen”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 3907-2007, de 21 de enero de 2009, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;
- 6.- “Secuestro de David Urrutia Galaz”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4691-2007, de 28 de enero de 2009, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Oscar Herrera;
- 7.- “Secuestro de Darío Miranda, Jorge Solovera y Enrique Jeria”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 695-2008, de 09 de marzo de 2009, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Fernando Castro;
- 8.- “Moreno Mena y otros, Episodio Pitrufluén”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5233-2008, de 21 de diciembre de 2009, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo;
- 9.- “Episodio Porvenir”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 6-2009, de 15 de marzo de 2010, pronunciada por los ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;
- 10.- “Ortega con Fisco”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2080-2008, de 08 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Héctor Carreño (minoría) Sr. Pedro Pierry (minoría), Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Nelson Pozo y Maricruz Gómez de la Torre;
- 11.- “Secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2581-2009, de 26 de abril de 2010, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Alberto Chaigneau;
- 12.- “Secuestro de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 8760-2009, de 22 de noviembre de 2010, pronunciada por los Ministros Nibaldo Segura (minoría), Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;
- 13.- “Secuestro de Claudio Silva y Fernando Silva Camus”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 1198-2010, de 20 de diciembre de 2010, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura



(minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo;

14.- “Episodio “Hospital San Juan de Dios”, por el Secuestro calificado de Franz Bagus”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2414-2010, de 21 de abril de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Benito Mauriz;

15.- “Secuestro de Jaime Robotham y Claudio Thauby”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5436-2010, de 22 de junio de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;

16.- “Secuestro de José Rodríguez Hernández”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 6601-2011, de 29 de noviembre de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Luis Bates;

17.- “Homicidio de José Barrera y otros”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5720-2010, de 7 de marzo de 2012, pronunciada por los Ministros Sr. Nibaldo Segura (minoría), Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Domingo Hernández;

18.- “Homicidio de Carol Flores Castillo”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5969-2010, de 9 de noviembre de 2011, pronunciada por los Ministros Sr. Jaime Rodríguez (minoría), Sr. Rubén Ballesteros (minoría), Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por el abogado integrante Sr. Nelson Pozo;

19.- “Secuestro de Grober Venegas”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 3573-2012, de 22 de noviembre de 2012, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sres. Jorge Lagos (minoría) y Emilio Pfeffer (minoría);

20.- “Episodio “Las Vizcachas”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 3841-2012, de 4 de septiembre de 2012, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Haroldo Brito, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Luis Bates;

21.- “Secuestro de Reinaldo Poseck Pedreros”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 519-2013, de 18 de julio de 2013, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y por el abogado integrante Sr. Emilio Pfeffer (minoría);

22.- “Secuestro de Sergio Cádiz y Gilberto Pino”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2387-2013, de 09 de enero de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Ricardo Blanco;



- 23.- “Episodio Torres de San Borja”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2911-2013, de 6 de enero de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 24.- “Episodio Tejas Verdes”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 1424-2013, de 1° de abril de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Gloria Ana Chevesich (minoría);
- 25.- “Homicidio de Jorge Parra Alarcón”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 6318-2013, de 29 de mayo de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sra. Gloria Ana Chevesich (minoría) y por el abogado integrante Sr. Luis Bates;
- 26.- “Secuestro de Juan Gianelli, José Sagredo y Alfredo Salinas”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5831-2013, de 10 de junio de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Ricardo Peralta (minoría);
- 27.- “Homicidio Calificado de Luis Fidel Arias Pino”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 1813-2014, de 02 de septiembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Guillermo Silva (minoría);
- 28.- “Secuestro Calificado de Mario y Nilda Peña Solari”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4300-2014, de 04 de septiembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 29.- “Secuestro Calificado de Miguel Woodward”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4240-2014, de 30 de septiembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 30.- “Episodio Londres 38, Secuestro de María Cecilia Labrín”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 17037-2013, de 08 de octubre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 31.- “Episodio Villa Grimaldi, Secuestro de Carlos Guerrero Gutiérrez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4549-2014, de 16 de octubre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 32.- “Episodio Villa Grimaldi, Secuestro de Claudio Contreras Hernández”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4550-2014, de 16 de octubre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 33.- “Episodio Endesa”, Rol Ingreso a la Corte Suprema N° 17030-2013, de 22 de octubre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz (minoría);



- 34.- “Episodio Villa Grimaldi, Homicidio de Ramón Martínez González”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 21177-2014, de 10 de noviembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 35.- “Secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2931-2014, de 13 de noviembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 36.- “Secuestro calificado de Pedro Merino”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22266-2014, de 15 de diciembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sra. Andrea Muñoz y Sr. Carlos Cerda;
- 37.- “Homicidio de Heriberto Samuel Flores Müller”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 11983-2014, de 23 de diciembre de 2014, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Carlos Cerda;
- 38.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Juan Meneses Reyes”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 11964-2014, de 12 de enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 39.- “Episodio Marchigue, Homicidio de Néstor González Lorca”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 21971-2014, de 27 de enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 40.- “Secuestro de Ruth Escobar Salinas,” Rol Ingreso Corte Suprema N° 31425-2014, de 30 de enero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 41.- “Secuestro de Sergio Ruiz Lazo”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 21589-2014, de 10 de febrero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 42.- “Secuestro de José Orlando Flores Araya y Rodolfo Valentín González”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22343-2014, de 26 de febrero de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 43.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Sergio Riveros Villavicencio”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 29214-2014, de 13 de marzo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;



- 44.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Agustín Reyes González”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22652-2014, de 31 de marzo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 45.- “Episodio Los 8 de Valparaíso”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 20288-2014, de 13 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 46.- “Secuestro de Fernando Olivares Mori”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22645-2014, de 20 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sra. María Eugenia Sandoval (minoría) y Sr. Lamberto Cisternas;
- 47.- “Secuestro de Carlos Sepúlveda Palavecino”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23324-2014, de 22 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 48.- “Meza con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23441-2014, de 28 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 49.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Alfonso Chanfreau Oyarce”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 24558-2015, de 29 de abril de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz (minoría);
- 50.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Gloria Lagos Nilsson”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 32161-2014, de 14 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus;
- 51.- “Homicidio de Ana María Puga y Alejandro de la Barra”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 25656-2014, de 19 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Lamberto Cisternas;
- 52.- “Aguirre con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23583-2014, de 20 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez;
- 53.- “Becerra con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 25671-2014, de 20 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y por los abogados integrantes Sres. Jaime Rodríguez y Jorge Lagos (minoría);
- 54.- “Caballero con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 25138-2014, de 25 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr.



Carlos Kunsemüller y por los abogados integrantes Sres. Jaime Rodríguez y Jorge Lagos (minoría);

55.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Máximo Gedda y Alejandro Parada”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 1665-2015, de 25 de mayo de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;

56.- “León con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 29567-2014, de 20 de julio de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;

57.- “Pugin con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 4526-2015, de 20 de julio de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el fiscal Judicial Sr. Juan Escobar;

58.- “Episodio Enzo Muñoz y Ana Alicia Delgado Tapia”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 27178-2014, de 4 de agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Ricardo Blanco y Sra. Andrea Muñoz;

59.- “Secuestro de José Salazar Aguilera”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 1116-2015, de 17 de agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría);

60.- “Secuestro de Alonso Lazo Rojas”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 29086-2015, de 24 de agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;

61.- “Episodio Coelemu”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 932-2015, de 24 de agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;

62.- “Episodio Academia de Guerra, Homicidio de Mario Lavanderos”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 3781-2015, de 24 de agosto de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;

63.- “Episodio Carahue, Homicidio de Juan Segundo Cayul Tranamil”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 5706-2015, de 22 de septiembre de 2015, pronunciada por los Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sra. Andrea Muñoz;

64.- “Vásquez con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7735-2015, de 13 de octubre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y por los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus y Sr. Jorge Lagos (minoría);



- 65.- “Homicidio de Juan Tralcal Huenchumán”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7961-2015, de 25 de noviembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Julio Miranda y por los abogados integrantes Sres. Jaime Rodríguez y Carlos Pizarro;
- 66.- “Episodio Villa Grimaldi, Secuestros Calificados de Ramón Ascencio Subiabre, Abraham Ferruz López, Octavio Boettiger y Luis Quezada”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 30598-2015, de 1° de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Aránguiz;
- 67.- “Episodio Villa Grimaldi, Secuestro de Germán Cortés Rodríguez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 13154-2015, de 03 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Manuel Valderrama;
- 68.- “Zúñiga con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 11208-2015, de 10 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por el abogado integrante Sr. Jean Pierre Matus;
- 69.- “Episodio Caravana De La Muerte, Antofagasta”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 31945-2014, de 16 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Carlos Aránguiz;
- 70.- “Candia con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 9652-2015, de 24 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Manuel Valderrama;
- 71.- “Marcone con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22856-2015, de 29 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas;
- 72.- “Homicidio de José Miguel Vargas Valenzuela”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 8706-2015, de 11 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y por los abogados integrantes Sr. Rodrigo Correa y Sr. Jean Pierre Matus;
- 73.- “Gómez con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7741-2015, de 11 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez;
- 74.- “Monsalve con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 13699-2015, de 11 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y el abogado integrante Sr. Rodrigo Correa (minoría);
- 75.- “Guajardo con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 10775-2015, de 19 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Jorge Dahm;



- 76.- “Rojas con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 13170-2015, de 21 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Rodrigo Correa (minoría);
- 77.- “Episodio Villa Grimaldi, Cuaderno Principal”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 17887-2015, de 21 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm;
- 78.- “Operación Colombo, Secuestro de Stalin Aguilera”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 9031-2015, de 25 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sra. Andrea Muñoz y Sr. Jorge Dahm;
- 79.- “Caucoto con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 37993-2015, de 25 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 80.- “Secuestro de Luis Almonacid Dumenez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7399-2015, de 28 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Arturo Prado (minoría);
- 81.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Jaime Cádiz”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 17012-2015, de 29 de enero de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Haroldo Brito y los abogados integrantes Sr. Jaime Rodríguez y Sr. Rodrigo Correa (minoría);
- 82.- “Homicidio de Isidro Arias Colillán”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 15928-2016, de 29 de marzo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 83.- “Secuestro Calificado de Zenón Sáez Fuentes”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 3975-2016, de 29 de marzo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 84.- “Secuestro Calificado de José Patricio León Gálvez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 21031-2015, de 12 de mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Carlos Cerda y Sr. Manuel Valderrama;
- 85.- “Homicidio de Raúl Muñoz Muñoz”, Rol Ingreso Corte N° 14283-2015, de 18 de mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 86.- “Episodio Población Irene Frei”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2962-2016, de 25 de mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm, y los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus Acuña y Sr. Jorge Lagos Gatica (minoría);



- 87.- “Aplicación de tormentos a Hayde Oberreuter”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 2962-2016, de 25 de mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm y los abogados integrantes Sr. Jean Pierre Matus Acuña y Sr. Jorge Lagos Gatica (minoría);
- 88.- “Secuestro calificado de Luis Ibarra Durán”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7803-2015, de 25 de mayo de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemüller y el abogado integrante Sr. Arturo Prado (minoría);
- 89.- “Montecinos con Fisco de Chile”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 14343-2016, de 10 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm, y por el abogado integrante Sr. Jorge Lagos (minoría);
- 90.- “Episodio Operación Colombo, Secuestro calificado de Modesto Segundo Espinoza Pozo y Roberto Enrique Aranda Romero”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 12192-2015, de 16 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Carlos Cerda;
- 91.- “Secuestro Calificado de Artemio Gutiérrez, Javier Fuentealba y Abundio Contreras”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 11198-2015, de 20 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Jorge Dahm;
- 92.- “Secuestro Calificado de Arturo Hillrens Larrañaga”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 173-2016, de 20 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes (minoría) y Sr. Jorge Dahm;
- 93.- “Homicidio Calificado de Leandro Arratia Reyes”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 20567-2015, de 21 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 94.- “Homicidio Calificado de Ramón Zúñiga Sánchez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 179-2016, de 21 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 95.- “Homicidio Calificado de Luis Romero Rosales”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23568-2015, de 21 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 96.- “Homicidio Calificado de Domingo Antonio Urbina Díaz”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 9757-2015, de 21 de junio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 97.- “Homicidios de Charles Horman y Frank Teruggi”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 20166-2015, de 20 de julio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm;



- 98.- “Episodio Escuela de Artillería de Linares, Torturas de Belarmino Sepúlveda y otros”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 20580-2015, de 21 de julio de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 99.- “Episodio Comando Conjunto, Secuestro de Juan Luis Quiñones Ibaceta”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23572-2015, de 02 de agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 100.- “Homicidio de Orlando Ponce”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 34165-2016, de 02 de agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 101.- “Episodio Familia Gallardo”, Rol N° 24290-2016, de 08 de agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 102.- “Episodio Londres 38, Secuestro de Carlos Cubillos Gálvez”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 13762-2016, de 17 de agosto de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Jorge Dahm y por el abogado integrante Sr. Jaime Rodríguez;
- 103.- “Homicidio de Ricardo Ruz Zañartu”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 24288-2016, de 05 de septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 104.- “Secuestros de Oscar Fetis Sabelle, Sergio Fetis Valenzuela, Luis Wall Cartes y Tomás Ramírez Orellana”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 24045-2015, de 06 de septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Juan Eduardo Fuentes, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 105.- “Secuestro de Mónica Llanca Iturra”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 7372-2016, de 13 de septiembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 106.- “Secuestro de José Ramírez Rosales”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 34057-2016, de 06 de octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm;
- 107.- “Secuestro y Homicidio de Vicente Atencio Cortés”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 28637-2016, de 06 de octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Manuel Valderrama y Sr. Jorge Dahm;
- 108.- “Secuestro de Alejandro Villalobos Díaz”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 23573-2015, de 13 de octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;



- 109.- “Homicidio de Hugo Araya y Marta Vallejos Buschman”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 22206-2016, de 13 de octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 110.- “Secuestro de Marcelo Concha Bascuñán”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 44074-2016, de 24 de octubre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 111.- “Secuestro de José Calderón Ovalle”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 58917-2016, de 07 de noviembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm;
- 112.- “Secuestro de Jorge Ortiz Moraga”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 28641-2016, de 08 de noviembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Julio Miranda (suplente);
- 113.- “Homicidio de Guillermo Vallejos Ferdinand”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 34447-2016, de 1° de diciembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y por el abogado integrante Jean Pierre Matus;
- 114.- “Homicidio de Manuel Flores Durán y Gerardo Osorio”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 15963-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Manuel Valderrama;
- 115.- “Secuestro Calificado de Enrique Corvalán Valencia, Pedro Silva Bustos y Jorge Salgado Salinas”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 62032-2016, de 14 de noviembre de 2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y por el abogado integrante Jean Pierre Matus;
- 116.- “Secuestro Calificado de Héctor Vásquez Sepúlveda”, de 03 de enero de 2017, Rol Ingreso Corte Suprema N° 76273-2016, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Carlos Kunsemüller, Sr. Haroldo Brito, Sr. Lamberto Cisternas y Sr. Jorge Dahm; y,
- 117.- “Episodio José Domingo Cañas, torturas Viviana Uribe, Gloria Laso y Otras”, Rol Ingreso Corte Suprema N° 62211-2016, de 23 de enero de 2017, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Lamberto Cisternas, Sr. Manuel Valderrama, Sr. Jorge Dahm y por la abogado integrante Sra. Rosa Leonor Etcheberry.

Aseveran que en un caso como el que ahora nos convoca, la reparación del demandante debería expresarse en que la Judicatura interna acogiese la acción civil incoada con ese propósito, y ordene indemnizar a don Francisco Reginaldo Quezada Núñez. Esta sería la única conclusión a la que se puede arribar, si se considera que los hechos que dan vida a esta demanda son, precisamente, las actuaciones cometidas por agentes del Estado de Chile, que constituyen un crimen de derecho internacional, y que afectaron la vida de la



víctima don José Elías Quezada Núñez, causándole un daño sustantivo a su hermano, el demandante de autos.

Exponen sobre el daño provocado y el monto de la indemnización, señalando que en el caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que, como hermano de don José Elías Quezada Núñez, le ha tocado soportar a su representado.

La dolorosa situación a la que él se ha visto enfrentado, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Entienden que el daño moral es aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es, un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Esta forma de conceptualizar el daño moral es coherente con la forma en que la doctrina chilena y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, lo ha entendido.

Citan a don Arturo Alessandri quien, en su momento, definió el daño moral como “(...) el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida”. El mismo autor sostiene que el daño moral se identifica con la expresión “el precio del dolor”. Según este catedrático, el carácter indemnizable del daño moral no cumple sólo una función reparatoria, ya que daños como los que han sufrido, son invaluable e irreparables, sino que también compensatoria, ya que la indemnización del daño moral pretende hacer de nuevo la vida más liviana a quien ha soportado una dura carga, y utiliza para ello la expresión “las penas con pan, son menos”.

Destacan que parte de la doctrina comparada, como por ejemplo, autores como don José Luis Díez y don Ramón Domínguez Águila, ha expandido el concepto de daño moral a “una lesión de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima de contenido no patrimonial”. Por su parte, las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia tienden a definir el daño moral como “aquél que lesiona un derecho extramatrimonial de la víctima”, junto con afirmar que “es la lesión o agravio, efectuado dolosa o culpablemente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a otro hombre” (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 13 de marzo de 1985, Revista de Derecho y Jurisprudencia (RDJ), Tomo LXXXII, sec. 2, p. 6). En la misma dirección, corren también aquellas sentencias que definen el daño moral como un conjunto de “atentados a derechos personalísimos del ser humano que no tienen un contenido económico” (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 1º de julio de 1997, RDJ, Tomo XCIV, sec. 2, p. 79).



Argumentan que respecto la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Del sentido común fluye que un familiar, en este caso, la cónyuge de una víctima de un delito de esta naturaleza, ha sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones –sic-. Desde el momento en que ya se tiene por probado que una persona perdió su vida o vio lesionada su libertad individual y/o su seguridad personal, por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los más cercanos a la víctima –piénsese, a modo ilustrativo, en su cónyuge, sus hijos o sus padres- habrán resultado ilesos en su fuero interno –sus afectos y emociones-, luego de los delitos cometidos. Por eso es que para un sector importante del foro judicial al cual adhiere este libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego, entonces, se infiera como consecuencia necesaria el daño sufrido, con ocasión del hecho ilícito cometido.

Citan sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, de 08 de noviembre de 1944, que, en lo pertinente, declara que “(...) una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño moral, es el efecto de la disminución de la capacidad de trabajo, la depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia, que para el demandante -pariente cercano de la víctima- importa el delito o cuasidelito cometido en la persona de ésta” (RDJ, Tomo XLII, sec. 1, p. 392).

Por otra parte, también ha sostenido nuestro máximo tribunal que “Atendida la naturaleza del daño moral, no existe la posibilidad de rendir pruebas para apreciar su monto. El dolor o sufrimiento que pueda producir determinada circunstancia, y que se radica en la intimidad de una persona, no tiene parámetros ni hay forma de medirlo o cuantificarlo” (Cfr. Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación, rol ingreso N° 2097-2004).

En este mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha expresado que “El daño moral entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto afecta la integridad psíquica del individuo y que se traduce en el agobio que genera el haber sufrido una lesión considerable y el riesgo para su vida que ello representó, no requiere de prueba, las consecuencias que nacen de su propia naturaleza son obvias y lógicas, que no pueden desconocerse en ningún procedimiento aunque se aprecie la prueba en forma legal, pues el mínimo razonamiento, criterio o principio lógico, demuestra que una lesión tan considerable necesaria e indefectiblemente conlleva una aflicción psíquica. Ahora bien, su evaluación debe hacerse conforme a la prueba tasada o legal y a la apreciación prudencial del sentenciador, lo que es distinto a la afirmación de que el daño moral requiere prueba. La dimensión del daño



moral se obtiene indudablemente y sin lugar a discusión, de las pruebas consideradas por la juez a quo en la sentencia, de esta forma, necesariamente el actor debe ser indemnizado, pues el artículo 2314 del Código Civil no distingue clases o tipo de daños” (Excma. Corte Suprema de Justicia, sentencia dictada en causa rol ingreso N° 5946-2009).

Más recientemente, nuestro máximo tribunal, el 1° de diciembre de 2015, sostuvo: “Trigésimo tercero: Que, en cuanto que lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atinente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva. Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto. Trigésimo cuarto: Que la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve per se la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la existencia del delito por parte de los inculcados y por el cual se les condenó, forzoso es concluir que se han producido y que debe ser reparado dicho perjuicio, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que la muerte de su hermano ha afectado a los demandantes, por la naturaleza del perjuicio producido de todo lo cual se concluye que este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter espiritual que reviste. En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a que la desaparición forzada de una persona produce sufrimiento a sus parientes y cercanos, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación, rol ingreso N° 30598-2014).

Agregan que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilena, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las



afectaciones a su derecho a la vida o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que dicho padecimiento “(...) resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Moiwana”. Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C N° 124, párr. 195; “Caso Gómez Palomino”. Reparaciones. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C N° 136, párr. 132; “Caso Blanco Romero y otros”. Reparaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C N° 138, párr. 132; “Caso Masacre de Mapiripán”. Reparaciones. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134, párrs. 283 y siguientes; “Caso Masacre Pueblo Bello”. Reparaciones. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140, párr. 255; “Caso López Álvarez”. Reparaciones. Sentencia de 1° de febrero de 2006. Serie C N° 1141, párr. 201, letra b; “Caso Baldeón García”. Reparaciones. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C N° 147, párr. 130).

Creen que después de todo lo dicho, es comprensible que un demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la Judicatura alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado.

Agregan que no obstante, los órganos encargados de la administración de Justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran. Por ello, solicitan que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos) para el demandante de autos, don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, a título de indemnización por el daño que se le ha causado, como consecuencia directa del crimen cometido en contra de su hermano, don José Elías Quezada Núñez, por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta Judicatura determine en Justicia. Dicha cantidad demandada, deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Concluyen solicitando se tenga por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizada, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos chilenos), por concepto de aquellos daños morales que ha padecido el demandante, don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado, cometidos en perjuicio de su hermano don José Elías Quezada Núñez, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que se considere en Justicia



adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Consta certificado de fecha 19 de octubre del año 2017, emanado de Ministro de Fe, en el que deja constancia de haber notificado personalmente la demanda a la parte demandada.

Con fecha 8 de noviembre del año 2017 comparece don Jorge Escobar Ruiz, Abogado Procurador Fiscal de Santiago (S), del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, ambos domiciliados en Agustinas N° 1.687, comuna y ciudad de Santiago, quien contesta la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en autos, solicitando su completo rechazo, con costas, en virtud de los antecedentes que expone.

Señala que el abogado, don Nelson Caucoto, en representación del demandante don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, en su calidad de hermano de don José Elías Quezada Núñez, ejecutado con fecha 9 de octubre de 1973, solicita el pago de la suma de \$200.000, más reajustes por IPC e intereses, desde la fecha de interposición de la demanda y hasta su pago efectivo, con costas.

Opone las siguientes excepciones, defensas y alegaciones que expone.

1) Excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del demandante que comparece en calidad de hermano de la víctima, por haber sido preterido legalmente.

Refieren que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales —que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos— deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad —las que, por cierto, son imprescindibles— pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Así, no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se



excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en 1 cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

El impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Ahora bien, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Refieren que en el Derecho Comparado, en el Common Law, se alude al concepto de “loss of consortium”; esto es, el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. En el Derecho estadounidense se alude al concepto de “loss of society”, que se refiere a la noción de control, poder marital. Por su parte, en Inglaterra, se menciona el “dependant law”, en donde ocupan el primer y excluyente lugar el o la cónyuge y los hijos. También en Sudamérica, específicamente en Argentina, esta materia se encuentra resuelta en el artículo 1098 del Código Civil, según el cual, esta acción de satisfacción está limitada a los herederos forzosos. En nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del



Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto. Al respecto, es claro que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fueron preteridos por la ley como beneficiarios de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

Afirman que en suma, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó al demandante en su calidad de hermano de la víctima.

2) Excepción de reparación satisfactiva del actor, fundado en que el hecho que el demandante, que comparece en su calidad de hermano de la víctima, no haya tenido derecho a un pago en dinero por la preterición legal, no significa que no haya obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta.

Señala que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido. En efecto, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Refiere que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados. Ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, -siguiendo el referido



Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación "moral" buscada por el proyecto.

En este sentido, puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias – sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Expresa que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, "pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) "Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida" y b) "Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo". Precisamente, en el caso de las personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, señaladas en detalle previamente en la presente contestación, a saber:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido- desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los



derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas 27 políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos 28 Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Además, el actor de autos pueden ser titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Asevera como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente. En este sentido, diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Indica que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto, que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos. Así, en el caso Almonacid, se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el



Estado (supra pár. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares(cónyuge) y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior – prosigue la sentencia – el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial...”

Tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera 4 inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Estima que aun, entonces, de ser efectivo que el demandante no pudo percibir una reparación expresada mediante pagos en dinero, en tal caso, como se ha expuesto y también lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el dicho fallo del caso “Almonacid”, las políticas de reparación asumidas por el Estado por violación a los derechos humanos, entre las cuales están las reparaciones simbólicas ya referidas, los programas de beneficios educacionales y el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), significan también reparación a los familiares de víctimas de derechos humanos.

Estando entonces las acciones de autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida por el demandante que comparece en calidad de hermano de la víctima, por haber sido ya indemnizado mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

3) Excepción de prescripción extintiva, de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Señalan que conforme al relato efectuado, el homicidio de la víctima ocurrió el día 09 en octubre del año 1973. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de las demanda de autos, esto es, el día 19 de octubre de 2017, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que



opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente las acciones indemnizatorias deducidas como consecuencia de ello, por encontrarse prescritas.

En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acciones civiles, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Refiere que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”.

Expone que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Afirma que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de



particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Refiere que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Estima que resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. La prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

A continuación cita sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema, de 21 de enero de 2013, en que unificó jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Refiere que dicha sentencia, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no



contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (homicidio en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

Asevera que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia acogiendo las argumentaciones hechas valer, lo que solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 3 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

A continuación expone respecto el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señalando que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Señala que aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible



conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Agrega que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Destaca que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias. La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención señala que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.



Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirma que dicho planteamiento ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. En efecto, la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar:

“VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.”

“VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables.

Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada – basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso”.

Relata que lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no debiendo apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas



contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Afirma que con el mérito de lo expuesto precedentemente se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

4) En subsidio de las defensas y excepciones opuestas precedentemente, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido de \$200.000.000 para el demandante.

Con relación al daño moral hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Estima que tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Refiere que la Excma. Corte Suprema ha dicho: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”. Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No



habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en las demandas como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

5) En subsidio de las excepciones precedentes de preterición, reparación satisfactiva y prescripción, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), como beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

6) Improcedencia del pago de reajustes e intereses, fundado en que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja las demandas y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, pues los actores solicitan el pago de reajustes e intereses desde la notificación de la demanda hasta su pago efectivo.

Afirma que a la fecha de interposición de las demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Refiere que reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.



Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, “En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio.”

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Concluye solicitando se tenga por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 16 de noviembre del año 2017 se tuvo por contestada la demanda y se confirió traslado para la réplica, el que fue evacuado por el actor con fecha 23 de noviembre del año 2017.

En su escrito reitera todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, los que dan por reproducidos. Además, agregan ciertas consideraciones, las que exponen.

Señala respecto la excepción de preterición en lo económico y reparación satisfactiva supuestamente concurrentes al demandante, en consideración a la calidad de hermano que ostenta el actor, de don José Elías Quezada Núñez, por el motivo de que ya ha sido indemnizado por la ley 19.123 (y 19.980), que creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, les parece absolutamente errado, ya que, en el mejor de los casos, los montos que otorga la referida Ley, sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones, y reparaciones simbólicas, en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por los familiares de don José Elías Quezada Núñez, menos aún el experimentado por su hermano, y es por tal motivo que se ha interpuesto la presente demanda. Con todo, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener los familiares, por lo que no sería entonces un crédito líquido y



actualmente exigible. Conforme con ello estiman que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Le parece razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega. Más aún reconoce el deber de indemnizar, cuestión que debiera hacer en todo caso con el demandante.

En directa relación a lo anterior, la Ley 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece por la desaparición de su familiar. Y lo claro en este ámbito tan íntimo de su ser, es que el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparado en modo alguno subsiste hasta el día de hoy.

Afirma que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles las reparaciones económicas, y menos entonces, las reparaciones simbólicas (o satisfactiva cómo la denomina el Consejo de Defensa del Estado) con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 (“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”). Entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber existido reparaciones simbólicas y beneficios de salud para los dolientes que se encuentran en la misma línea (o situación) parental de nuestro mandante. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión o cualquier otro tipo de reparación, y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción invocada por el Fisco.

Expresa que así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada como se verá más adelante. No cabe entonces que el demandado con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a la ley precitada, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidos de demandar. Comprueba lo anterior lo sentenciado en otros casos, como por ejemplo en el de Carmelo Soria, cuyos familiares si obtuvieron una indemnización independiente de ser beneficiarios del Informe Rettig. Lo mismo ocurre con el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, a quienes el Consejo de Defensa del Estado indemnizó con una cuantiosa suma pese a recibir los familiares la misma pensión Rettig. Casos también como el de la familia del ex Canciller



Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5 desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación del Informe Rettig. Si así no lo entendiéramos, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones. Del mismo modo lo ha entendido también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en forma reiterada; “Finalmente la alegación de no proceder la indemnización reclamada por haberse otorgado la establecida en la Ley N° 19.123 debe ser rechazada, por cuanto es palmario que la dispuesta en tal cuerpo legal no obstante sus motivaciones y texto, es puramente asistencial, destinada sólo a establecer condiciones de sobrevivencia y no indemnizatorias” (CFR. Corte de Apelaciones, Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07-2007, Considerando 7°). En el mismo sentido se falla en el caso Carrasco con Fisco (Corte de Apelaciones de Santiago, caso Carrasco con Fisco de Chile, 10-07-2007, Rol 6715-2002, Considerando 8°). Igualmente se ha fallado recientemente por nuestra Corte, “Que tampoco resulta pertinente la improcedencia de la acción intentada, en razón de haber sido ya indemnizada la demandante en conformidad a la Ley 19.123, toda vez que la propia ley en su artículo 1° señala que la pensión de reparación será compatible con toda otra de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario” (Cfr. Corte De Apelaciones De Santiago, Caso “Jara con Fisco de Chile”, 23.09.2009 , Rol 2839-2008, considerando 10°). Siguiendo la misma línea argumentativa, se ha fallado lo siguiente; “Que sobre la misma materia cabe tenerse presente que la bonificación y demás beneficios reconocidos por el Estado a los familiares de las personas detenidas desaparecidas mediante la Ley N° 19.123, otorgados en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, son de naturaleza y finalidad especiales, y por ende no afectan ni imposibilitan acceder a la indemnización que se persigue en esta causa, ya que tiene como causa la perpetración de un delito” (Cfr. Corte De Apelaciones De Santiago, Caso “Vergara con Fisco de Chile”, 23.09.2009, Rol 2495-2008).

A su vez, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Chile, desestimando las alegaciones del Estado de Chile, ha sostenido “Que en cuanto a la alegación del Fisco de Chile para que se declare improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado en razón de que, de conformidad con la Ley N° 19.123, los actores obtuvieron bonificación compensatoria, pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales, los cuales, por los motivos que señala, serían incompatibles con toda otra indemnización, tal alegación debe ser igualmente rechazada, por cuanto la ley citada, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno tal incompatibilidad, sin que sea



procedente suponer aquí, que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata, en consecuencia, de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado voluntariamente en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Al efecto, el propio artículo 4° de la ley N° 19.123, refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa que en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”;(Considerando décimo cuarto) (Cfr. Corte Suprema De Justicia, “Caso San Javier” Rol 4723-2007).

Asevera que nos encontramos con una norma rectora establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de La República; “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Pues en virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la propia Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 para decir que el daño moral ya está reparado o preterido, llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello sería abiertamente inconstitucional. Finalmente, si se aceptara hipotéticamente la tesis Fiscal, en el caso del monto de la reparación que ha recibido la víctima estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir por el Estado de Chile, y le estaría vedado a la víctima discutirlo. Claro está, que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

Respecto las fuentes del derecho aplicables, le parecen jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Cree que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema. En el caso “Caro con Fisco de Chile” la Corte Suprema da buena cuenta de ello: “Que, como lo ha



sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4º del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado” (Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 19.10.05, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol N° 4004-2003, considerando N° 6).

Agrega que en el mismo sentido, en el caso “Bustos con Fisco” nuestro Máximo Tribunal ha dicho que: “... si bien el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, reconoce el principio de la responsabilidad del Estado, no indica cual es la naturaleza de ésta, de suerte que para determinarla debe necesariamente remitirse a la ley y, en este sentido, el artículo 4º de la Ley N° 18.575 previene en general, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado” (Cfr. Excelentísima Corte Suprema, 26.01.05, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3354-2003, considerando N° 7.)

Basado en lo anterior, afirma que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado.

Se debe tener presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Alegación, esta última, que resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos



mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como “inadmisible toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión” (Cfr. Pardo De Carvalho, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Así ha sentenciado: “Que al actuar de la forma que lo hicieron los ejecutados (...), es hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, importando un perjuicio en contra del acreedor, lo que no resulta aceptable, de acuerdo al principio acogido por este tribunal, por la doctrina, y que inspira además disposiciones como es la del artículo 1683 del Código Civil y otras de nuestra legislación, principio que recibe el nombre de teoría del acto propio. Se expresa en la forma latina *venire cum factum non valet*, lo que implica que no es lícito hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe.”(Cfr. Corte Suprema. 20.04.2004. Rol N° 3097-2003. Considerando N° 4.)

Aun así, el demandado en su contestación de la demanda insiste que el caso de autos estaría prescrito. Expone el actor que lo anterior no es así, por las siguientes razones:

-La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

-El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.

De acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo.

En nuestro medio, desde hace varios años ya, existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado que “cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una



violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)” (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: “Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de La Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” (Caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001; caso Villagrán Morales y otros, de 2001; caso Bámaca Velásquez, de 2002). En otras sentencias, la misma Corte ha manifestado: “Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”. (Caso Velásquez Rodríguez, de 1989. En el mismo sentido, caso Godínez Cruz, de 1989. Asimismo La Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina, dictados los años 1927, 1928 y 1949). La Corte también ha aclarado que el artículo 63.1 de La Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo. (Caso Velásquez Rodríguez). De otra parte, se ha señalado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta lógico ya que indudablemente una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal. En este sentido refiere el juez Cançado Trindade: “En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, así, ciertamente llegar a la configuración de la responsabilidad objetiva o absoluta del Estado a partir de la violación de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protección de los derechos



XZXJWGYZ

humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención (Voto del Juez A. Cançado. Caso El Amparo)”. (Cfr. Corte De Apelaciones De Santiago. Caso Marfull. 18.01.06. ROL N° 37.483-2004. Considerando N° 18.)

Reitera que el sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo, toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, la Ilma. Corte de Apelaciones ha sentenciado recientemente en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado que: “la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable”. Y luego, continúa señalando “Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos”. (Cfr. Corte De Apelaciones De Santiago, 11.05.07, Caso “Reyes Gallardo con Fisco de Chile”, Rol N° 3505-2002. Considerandos N° 2 y N° 3). Con todo, “Tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX” (Cfr. Corte De Apelaciones De Santiago, Caso “Carrasco con Fisco de Chile”, 10.07.2007 , Rol 6715-2002).

Refiere que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal (DUCCI, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 4ª Ed. 2005. p. 94). La evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que



esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2ª guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4º al estipular que las disposiciones particulares “se aplicaran con preferencia a las de este Código”.

En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas. Bueno es que el demandado sepa y acepte de una vez el principio jurídico mundialmente reconocido por todas las sociedades democráticas de que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.



Agrega que termina con otro pasaje que encontramos en la vasta jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema, que hoy en día es caudal de agua prístina del que beben los corazones de tantos heridos, sentires de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que encuentran el merecido frescor y sosiego espiritual en la justicia material –sic-: “Octavo: Que la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando se deja de aplicar la referida norma, se la vulnera, y también se infringe la del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos. Noveno: Que el derecho de las víctimas y de sus familiares de recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5° de la Constitución Política de la República. Décimo: Que analizando ahora las normas aplicadas por el fallo impugnado, cabe señalar que no resultan atinentes las normas de Derecho Interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en que se funda el fallo, al estar éstas reglas en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de recibir una reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas, estatuto normativo internacional reconocido por Chile como se ha expuesto. Cabe recordar que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos no sólo por la Constitución Política sino también de los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva. Undécimo: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2.497 señala que las reglas de prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto.” (Cfr. Excma. Corte Suprema, 08-04-2010 “Ortega con Fisco” Rol 2080-2008).

Expresa respecto al derecho aplicable, que existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable. Esgrime que ha citado doctrina y jurisprudencia al respecto. El Fisco ha hecho lo propio. Afirma que



cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del estado, por hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real - y no aparente – el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”. Lo segundo que señala es que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales. No olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile a propósito del inciso 2º del artículo 5 de La Constitución Política.

Respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Excelentísima Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, estima que si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia del máximo tribunal del país ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

En relación al monto de lo demandado, esgrime que ha señalado un monto específico pues una demanda indemnizatoria exige pretensiones concretas. No hay dinero que supla el dolor experimentado por su mandante. Parece hasta de mal gusto tener que justificar el peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo. En lo petitorio refiere que sí parece excesivo lo pedido, señaló que se condene a “la suma que Su Señoría disponga”.

Respecto los reajustes, reitera lo expuesto, por cuanto es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, momento procesal en que queda fijada la pretensión.

Concluye solicitando se tenga por evacuada la réplica en los términos señalados precedentemente, y se dé traslado para la dúplica.

Con fecha 1 de diciembre del año 2017 se tuvo por evacuada la réplica y se confirió traslado para la dúplica, el que fue evacuado por el demandado con fecha 7 de diciembre del año 2017. En su escrito reitera cada una de las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de la demanda.

Con fecha 3 de enero del año 2018 se recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que debe recaer.

Con fecha 10 de enero del año 2019 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que comparece don Nelson Caucoto Pereira y don Francisco Javier Ugás Tapia, abogados, en representación de don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, quienes deducen demanda civil en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por daño moral provocado a raíz de la ejecución del hermano del actor, don José Elías Quezada Núñez, acaecido el día 9 de octubre del año 1973, el que fue reconocido como víctima de violación a sus derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, solicitando el pago de la suma de \$200.000.000.-, más intereses, reajustes y costas, de acuerdo a los fundamentos referentemente reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que legalmente emplazado, el demandado Fisco de Chile contesta la demanda, solicitando su total rechazo, deduciendo las excepciones de improcedencia de la indemnización demandada por preterición legal del demandante, reparación satisfactiva y prescripción extintiva de la acción deducida; y en subsidio, la rebaja del monto indemnizatorio pretendido; de acuerdo a lo referido en lo expositivo de esta sentencia.

TERCERO: Que la demandante acompañó la siguiente prueba instrumental, la que no fue objetada en autos:

1. Certificado de Nacimiento de don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, emitido con fecha 3 de agosto de 2017, por el Servicio de Registro Civil e Identificación, nacido el 4 de octubre de 1957, el que señala en el rubro correspondiente al padre, a don Elías Quezada Jara, y en el rubro correspondiente a la madre, a doña Herminia Núñez Arratia.
2. Certificado de Nacimiento de don José Elías Quezada Núñez, emitido con fecha 3 de agosto de 2017, por el Servicio de Registro Civil e Identificación, nacido el 15 de marzo de 1945, el que señala en el rubro correspondiente al padre, a don Elías Quezada Jara, y en el rubro correspondiente a la madre, a doña Herminia Núñez Arratia.
3. Copia simple de las páginas 185 y 186, ambas del Tomo I, Volumen I, del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en que consta lo siguiente:
“(...) José Elías Quezada Núñez, 28 años, pioneta, militante socialista, miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de su población. Fue detenido por militares, el día 8 de octubre de 1973 en la población Manuel Larraín y trasladado a la Casa de la Cultura de Pudahuel.
Su muerte se produjo –según el certificado de defunción- el día 9 de octubre, en la vía pública a las 07:30 horas.



El mismo día 9, al consultar sus familiares en la Casa de la Cultura, se les responde al igual que en el caso anterior, que fue trasladado al Estadio Nacional, en circunstancias que ya había sido ejecutado. (...)”.

4. Copia de acusación dictada con fecha 27 de julio de 2016, por el Ministro en Visita Extraordinario, don Mario Carroza Espinoza, en causa rol N° 224-2010, del 34° Juzgado de Letras del Crimen de Santiago.
5. Copia de escritura pública de fecha 11 de julio del año 2017, otorgada en la notaría pública de Antofagasta, de doña Camila Jorquiera Monárdez.
6. Copia de sentencia de fecha 10 de junio del año 2014, pronunciada por la Excma. Corte Suprema, en autos Rol C-5831-2013.
7. Copia de sentencia de fecha 6 de enero del año 2014, pronunciada por la Excma. Corte Suprema, en autos rol C-2918-2013.
8. Copia de sentencia de fecha 29 de diciembre del año 2015, con fecha 29 de diciembre del año 2015, por la Excma. Corte Suprema, en autos rol C-22856-2015.
9. Ord. N° 846, de fecha 31 de octubre del año 2018, suscrito por doña Lorena Recabarren Silva, Subsecretaria Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

CUARTO: Que con fecha 27 de junio del año 2018, la actora presentó a don Arturo del Carmen Valderrama Lara, en calidad de testigo, quien legalmente juramentado declaró en autos, respecto el tercer punto de prueba fijado por resolución de fecha 3 de enero del año 2018, relativo a la existencia de perjuicios ocasionados por la demandada a la demandante que deban ser indemnizados, procedencia, naturaleza y monto al que estos ascienden, lo siguiente: que conoce a don Francisco Quezada desde hace 9 años, llegando a vivir juntos en la villa, en Linares. Que don Francisco es una persona muy callada, conociéndose de a poco con él, siendo un hombre al que le cuesta entregarse a las personas, siendo tímido. Un día le contó el problema que había tenido con su hermano mayor, el cual fue asesinado en el Régimen Militar, y de ahí entendió su forma de ser.

Señala en cuanto al monto, que no puede poner precio a una vida humana. Los perjuicios los ha traído con su familia. Afirma que el demandante es separado, vive solo, no tiene amistades, describiéndolo caso como un ermitaño, encerrándose en su casa, pasando sólo las navidades, año nuevo y las fiestas, tratando en ocasiones que comparta con su familia, compartiendo solo en dos ocasiones. . Todo se lo ha contado personalmente, porque dentro de la Villa no conversa con nadie Más.

Repreguntado el testigo para que aclare el tiempo que el demandante vive solo, responde que aproximadamente 9 años, desde que lo conoce. A su vez se le repregunta si conoce la edad que tenía el demandante al momento de la muerte de su hermano mayor, a lo que responde que aproximadamente 16 años. Por último, se le repregunta para que aclare en qué ocasiones



compartió el demandante con su familia, a lo que respondió que en una navidad, en el cual él se retiró temprano a su casa, bastante afectado, y la segunda ocasión, para un 18 de septiembre, retirándose temprano, siendo fechas que no le agradan mucho, no motivándolos.

QUINTO: Que en autos consta Ord. N° 56745/2018, de fecha 17 de diciembre del año 2018, emitido por el Jefe (S) del Departamento de Secretaría General y Transparencia, del Instituto Previsional Social, en el que remite anexo con detalle de beneficios de reparación de Leyes N° 19.123 y 19.980, recibidos por la cónyuge e hijos de la víctima Ley Rettig, don José Elías Quezada Núñez. En dicho anexo, de fecha 11 de diciembre del año 2018, se informa una suma total para doña María Inés Lira Lira, cónyuge del causante, de \$94.077.177; para su hija Tania M. Quezada Lira, una suma de \$10.345.144; para su hija Nora H. Quezada Lira, una suma de \$10.238.820; para su hijo Elier del C. Quezada Lira, una suma de \$10.313.200, y para su hijo José Reginaldo Quezada Lira, una suma de \$10.298.600.

SEXTO: Que se tendrá como hecho de la causa, que el suceso invocado como fuente de responsabilidad por los demandantes, referido al homicidio del hermano del actor, don José Elías Quezada Núñez, efectuado por agentes del Estado, con fecha 9 de octubre del año 1973, en la vía pública, a las 07:30 horas, lo que se encuentra debidamente acreditado en autos con los documentos acompañados, individualizados en los numerales 3° y 4° del Considerando Tercero de esta sentencia, y con el reconocimiento del mismo por el demandado, siendo aquél hecho considerado como violación a los derechos humanos, pues la parte demandada ha fundado su defensa en declaración de dicha naturaleza.

SÉPTIMO: Que la demandada opuso en primer término excepción de improcedencia de la indemnización, por haber sido preterido legalmente el demandante, en su calidad de hermano de la víctima, ello por cuanto la Ley N° 19.123 optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a estos últimos.

OCTAVO: Que el artículo 17 de la Ley N° 19.123 establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, conforme a lo dispuesto en los artículos 2°, N° 4, y 8°, N° 2. Agrega el artículo 18 que *“Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior”*.



Por su parte, el artículo 20 de la Ley establece que: *“Serán beneficiarios de la pensión establecida en el artículo 17, el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare, renunciare o falleciere, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad”.*

A su vez, el artículo 23 señala que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, otórguese a los familiares de las víctimas a que se refiere el artículo 18, una bonificación compensatoria de monto único equivalente a doce meses de pensión, sin el porcentaje equivalente a la cotización para salud, la que no se considerará renta para ningún efecto legal. Esta bonificación no estará sujeta a cotización alguna y se pagará a los beneficiarios indicados en el artículo 20, en las proporciones y con los acrecimientos que procedan, señalados en el citado artículo. Esta bonificación se deferirá y su monto se determinará definitiva e irrevocablemente en favor de los beneficiarios que hayan presentado la solicitud prevista en los incisos cuarto y quinto del artículo precedente, dentro de los plazos allí establecidos, extinguiéndose el derecho a ella para los beneficiarios que la presenten fuera de plazo”.*

El artículo 24 de la Ley dispone que *“La pensión de reparación será compatible con cualquier otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad sociales establecido en las leyes”.*

El artículo 25 por su parte sostiene que: *“Para todos los efectos legales, el Ministerio del Interior otorgará, a petición de los interesados o del Instituto de Normalización Previsional, un certificado en que conste que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o la Corporación establecida en el Título I de esta ley se ha formado la convicción de que determinada persona ha sido víctima de violación a los derechos humanos o de violencia política”.*

NOVENO: Que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos, acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

De las normas legales relacionadas es posible concluir que el bono de reparación que establece la Ley N° 19.123 y sus modificaciones, constituye más bien un beneficio de carácter social, más no una indemnización de daño moral sufridos por los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar el sufrimiento por la pérdida de un familiar, requisito fundamental a la hora de fijar una



indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado.

Cabe agregar que la acción indemnizatoria de estos autos está reducida al daño moral del actor, el cual no sólo lo sufren los padres e hijos de las víctimas, sino que también el entorno familiar más amplio que ha padecido por su pérdida, todo lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducidas por la parte demandada a propósito de la excepción en comento.

DÉCIMO: Que respecto la excepción, alegación o defensa de que el actor ha obtenido reparación satisfactiva, cabe tener presente que la jurisprudencia de nuestros Tribunales ha resuelto, de manera sostenida, que las indemnizaciones por el daño afectivo sufrido son perfectamente compatibles con otras reparaciones que el legislador ha contemplado para estos delitos de lesa humanidad, cuyo es el caso de los hechos sub lite.

Así, en fallo de nuestra Excma. Corte Suprema, de fecha 13 de octubre del año 2018, en autos rol C-22206-2016, se establece: *“Décimo Segundo: Que estas mismas reflexiones impiden admitir la alegación del Fisco de Chile en orden a declarar improcedente la indemnización demandada por la actora, en razón de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.123, pues esa pretensión resulta inconciliable con la normativa internacional antes señalada y porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no la contradice, como también se razonó, de suerte que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas en función de otras imposiciones legales de derecho patrio. La preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, sin que implique la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”.*

UNDÉCIMO: Que por consiguiente, la excepción de que el demandante ha obtenido reparación satisfactiva, será rechazada.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva de la acción civil emanada del ilícito (sea de 4 años que emana de la responsabilidad extracontractual o de la regla general de 5 años), se rechazará por considerar este Magistrado que tratándose de delitos de lesa humanidad, como es el caso de marras –no controvertido por la demandada-, la acción de la víctima es imprescriptible.



La demandada ha intentado adecuar los plazos de prescripción contando, de conformidad al artículo 2514 del Código Civil, desde la fecha de retorno a la democracia. En tanto el Fisco acepta la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 2332 del Código Civil –ocurrencia de los hechos-, no pudiendo sino concluirse que hay también una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación, sin que esta omisión importe contravención.

DÉCIMO TERCERO: Que tratándose de crímenes de lesa humanidad, estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, periodo en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de personas que *supuestamente y a completa discreción de los perpetradores* se oponían al régimen militar, como si aquello constituyera un delito o crimen, o aún en contra de simples civiles sin vinculación política alguna. Tales crímenes en Chile fueron cometidos por agentes del Estado o por civiles amparados por éste, lo cual es aun de mayor gravedad y lo que constituye, en esencia, un crimen de lesa humanidad.

Es crimen de lesa humanidad –o contra la humanidad-, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, *“todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se someta como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”* (Boletín Oficial del Estado, “Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en Roma el 17 de julio de 1998”).

DÉCIMO CUARTO: Que no ha sido controvertido por la demandada que el caso de marras se encuadra en aquellos crímenes de lesa humanidad, llevado a cabo por agentes del Estado. Corresponde determinar a continuación si la acción civil emanada de aquellos crímenes son o no prescriptibles. En el caso de determinar y sancionar la responsabilidad penal en este tipo de crímenes, no es debatido que son imprescriptibles. Así se establece



expresamente, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968.

Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en fallos como son causa Rol N° 1424-2011 de fecha 1 de abril de 2014, causa Rol N° 4300-2014, de septiembre de 2014, causa Rol N° 21.177-2014, de fecha diez de noviembre de 2014.

DÉCIMO QUINTO: Que habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, correspondería determinar si la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil. Como ya se adelantó, este magistrado es de opinión que la acción civil derivada de tales crímenes, es imprescriptible, opinión que encuentra asidero en recientes fallos emanados de la Corte Suprema: Rol N° 3841-12 de 4 de septiembre de dos mil trece, Rol N° 23.441-14 de 28 de abril de dos mil quince, Rol N° 25.138-14 de veinticinco de mayo de dos mil quince, rol N° 796-16 de 30 de junio de dos mil dieciséis.

DÉCIMO SEXTO: Que la presente acción civil indemnizatoria, derivada justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la acción civil esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002 sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en reciente fallo emanado de nuestra Corte Suprema, de fecha 25 de mayo del año 2015, Rol N° 25.138-2014, se expresa: *“Tercero: Que sin perjuicio de lo razonado en la sentencia que se revisa, en reiterada jurisprudencia esta Corte ha sostenido que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que en la especie ha sido declarado-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de*



los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este mismo sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigualado es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

Por otra parte, la reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional, y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.

Cuarto: Que en el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.

Quinto: Que por otro lado, las acciones civiles aquí deducidas por las víctimas en contra del Fisco tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan

al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma



internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Sexto: Que estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón no resultan aplicables a estos efectos las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el recurso, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

Séptimo: Que de otra parte, la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional.

Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Octavo: Que, por último, debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del recurso del Fisco de Chile, quedarían inaplicadas (...)."

DÉCIMO OCTAVO: Que según ha entendido nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas, principios y reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De acoger la tesis de prescriptibilidad planteada por la demandada, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro país. En efecto, Chile ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según



nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico. A su vez, lo señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en cuento dispone que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, imperativo legal la que se encuentra incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO NOVENO: Que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

VIGÉSIMO: Que como ya adelantado, este magistrado rechazará la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada, estimando que la acción civil emanada de una acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad –cuál es el caso de marras-, también es imprescriptible.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que teniendo presente todo lo expuesto, este magistrado concluye en cuanto al fondo que corresponde acoger la procedencia de indemnizar a la actora por el daño moral sufrido con ocasión de la ejecución de su hermano, don José Elías Quezada Núñez, acaecido el día 9 de octubre del año 1973, perpetrado por agentes del Estado. A continuación se fijará la cuantía de la indemnización.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en relación al daño moral objeto de esta acción, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que este constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.



VIGÉSIMO TERCERO: Que en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a actora.

VIGÉSIMO CUARTO: Que el actor se limitó a acompañar certificados de nacimiento que dan cuenta de su parentesco con el ejecutado, don José Elías Quezada Núñez. Siendo el actor hermano del ejecutado de marras, se prevé que su pérdida causó un gravísimo desconsuelo, pesar y dolor, más aun considerando las circunstancias de los hechos que motivan la presente causa y la edad que el actor tenía al momento del ilícito -16 años-.

VIGÉSIMO QUINTO: Que por todo lo expresado, considera este magistrado que se encuentra acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante, debido a la ejecución de su hermano, don José Elías Quezada Núñez, acaecido el día 9 de octubre del año 1973, perpetrado por agentes del Estado, ilícito ya reproducido en considerandos previos de esta sentencia.

Habrá de señalarse que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja, más aun cuando no se aportaron mayores antecedentes, carga que le correspondía al actor de conformidad al artículo 1698 del Código Civil. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida, tornándose caprichosa o arbitraria no y cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido. Así, el daño moral deberá ser determinado en cada caso concreto y diferenciado, debiendo aplicar normas de la sana crítica, según la entidad, naturaleza y extensión del daño producido, según lo referido en el considerando anterior.

VIGÉSIMO SEXTO: Que aplicando la sana crítica, el daño moral se evaluará prudencialmente, en la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos).

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que será rechazada la alegación o defensa consistente en la imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria, por falta de fundamento, por cuanto establecida en autos la existencia de un daño moral sufrido por el actor, constituye una facultad privativa de este Tribunal su determinación de acuerdo a los antecedentes allegados al proceso, no pudiendo, a pretexto de su dificultad, privarse a la víctima de un reparo o compensación.



VIGÉSIMO OCTAVO: Que igualmente será rechazada la alegación o defensa consistente en que debe considerarse todos los pagos en dinero que se hayan efectuado a los familiares del actor por parte del Estado, ya que no existe identidad en la titularidad de quienes percibieron los dineros por el Estado (familiares del actor) en virtud de la Ley N° 19.123 y el demandante de autos, entendiéndose que los daños sufridos por este no puede ser subsumido en los sufridos por aquellos.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en lo que respecto a reajustes e intereses, y en atención al principio de reparación integral del daño, aquella solicitud será acogida; sin embargo, desde las fechas según lo que se mencionará, acogiendo, en tal punto, la solicitud de la parte demandada.

Así, las sumas a que ha sido condenado el Fisco, deberán ser pagadas debidamente reajustadas, en la proporción que varíe el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia se encuentra firme y el pago efectivo. En cuanto a los intereses, las sumas a que ha sido condenado el demandado generarán intereses corrientes para operaciones reajustables desde la fecha en que quede firme la presente sentencia y hasta su pago efectivo.

TRIGÉSIMO: Que en nada alteran lo razonado, las demás pruebas aportadas por las partes.

Por lo anteriormente citado y expuesto, y lo dispuesto además en los artículos 5 y siguientes, y 38 de la Constitución Política de La República; artículos 2332, 2497, 2515 y siguientes del Código Civil, artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27 y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, y demás normativa legal aplicable;

SE DECLARA:

I. Que se rechazan las excepciones de improcedencia de la indemnización demandada por preterición legal del demandante, de reparación satisfactiva y de prescripción extintiva de la acción deducida, impetradas por el demandado Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado.

II. Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, deducida por don Nelson Caucoto Pereira y don Francisco Javier Ugás Tapia,



abogados, en representación de don Francisco Reginaldo Quezada Núñez, en contra del demandado Fisco de Chile, y se condena a éste a pagar en favor del actor la suma de \$10.000.000.-.

III. Que la suma indicada deberá ser pagada debidamente reajustada, en la proporción que varíe el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme y el pago efectivo.

IV. Que, asimismo, las cantidades referidas devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que la presente sentencia se encuentre firma y la fecha de pago efectivo.

V. Que no se condena en costas a la demandada, por estimar el Tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar.

NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Rol C-26578-2017

DECTADA POR DON OSVALDO CORREA ROJAS, JUEZ TITULAR DEL DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZA FABIOLA PAREDES ARAVENA, SECRETARIA SUBROGANTE DÉCIMO CUARTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, en Santiago a cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

